

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS
SANTIAGO DE CALI

Acción de Tutela

Radicación: 760014303-002-2023-00265-00

Accionante: GUILLERMO CAICEDO ARANGO.

Accionado: ALCALDÍA DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA DISTRITAL – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO.

Sentencia de primera instancia # 266.

Santiago de Cali, treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Procede el despacho a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela instaurada por el señor GUILLERMO CAICEDO ARANGO, quien actúa a través de apoderado judicial en contra de **ALCALDÍA DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA DISTRITAL – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO** mediante la cual solicita la protección del derecho de petición, que considera vulnerado por la entidad accionada.

HECHOS Y PRETENSIONES

Como fundamento de su pretensión, indica que el señor GUILLERMO CAICEDO ARANGO es heredero legítimo del señor LUIS ANTONIO CAICEDO USBEK (QEPD), tal y como lo acreditó con el registro civil de nacimiento anexo.

Aduce que la alcaldía de Cali por medio de su Oficina técnica de cobro coactivo inició proceso de cobro coactivo en contra del señor LUIS ANTONIO CAICEDO USBEK (QEPD), por el no pago del impuesto predial del año 2019, sobre los predios con matrículas inmobiliarias 370-34305 y 370-119357 y el señor GUILLERMO CAICEDO ARANGO, con el fin de poder realizar la sucesión de su señor padre, realizó el pago de los impuestos adeudados, pero la mencionada Oficina Técnica de Cobro Coactivo niega el levantamiento de medidas cautelares hasta tanto no se pague un presunto avalúo realizado a los predios.

Manifiesta que el accionante GUILLERMO CAICEDO ARANGO, con el fin de conocer a fondo dichos procesos, por medio de su apoderado judicial, el día 01 de septiembre de 2023, radica solicitud de copias y otras en la ventanilla única de la Alcaldía de Santiago de Cali, correspondiéndole el número de radicado 2023-4173010-165943-2.

Finaliza informando que a la fecha de presentación de este recurso Constitucional han transcurrido 33 días hábiles y el Departamento administrativo de Hacienda Municipal no ha dado respuesta a las solicitudes incoadas y a partir de la presentación del Derecho de petición y de los términos que por ley tiene la entidad accionada para la contestación, han transcurrido el tiempo que consagra la ley para ello sin respuesta alguna, siendo dicha información necesaria para que mi representado pueda ejercer su derecho a la defensa, sanear los inmuebles objeto de cobro coactivo y llevar a cabo la sucesión de su señor padre.

En consecuencia, solicita se ampare sus derechos fundamentales de petición consagrado en el artículo 23 superior en conexidad con el derecho a la defensa y el acceso real y efectivo a la Justicia y se brinde por parte de la accionada respuesta de fondo a las peticiones relacionadas en el escrito de solicitudes presentado el día 01 de septiembre hogaño, en la ventanilla única de la Alcaldía de Cali, con numero de radicado 202341730101659432.

ACTUACIÓN PROCESAL.

La presente acción de tutela fue admitida mediante auto T-527 del 17 de octubre de 2023, en contra de **ALCALDÍA DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA DISTRITAL – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO.**, y se ordenó notificar y oficiar a la parte accionada, para que en el término perentorio de dos días (2) se sirvieran dar explicaciones que consideraran necesarias respecto a los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela.

RESPUESTA DEL ACCIONADO ALCALDÍA DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA DISTRITAL – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO.

La entidad accionada ejerció oportunamente su derecho de defensa y contradicción, anexando 60 archivos digitales en PDF, ubicados en el consecutivo 06 de la presente tutela.

PROBLEMA JURÍDICO

En atención a lo expuesto corresponde a este Juez Constitucional determinar si en efecto, la entidad **ALCALDÍA DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA DISTRITAL – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO.**, vulneró a la parte accionante el derecho de petición al presuntamente no brindarle ninguna respuesta frente a la solicitud radicada el día 01/09/2023 o, si con la respuesta otorgada por la entidad accionada se configura la carencia actual de objeto por hecho superado.

CONSIDERACIONES

Sabido es que la acción de tutela está consagrada en la Constitución en su artículo 86, como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales constitucionales de toda persona, cuando han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en casos específicos, cuyo naturaleza residual la hace procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Según lo establece la disposición constitucional, esta acción tiene un carácter subsidiario y residual, por lo que ella solo procede cuando quiera que el afectado no tenga a su alcance otro medio de defensa judicial o cuando, existiendo ese otro medio, la tutela se ejerce como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable. Adicionalmente, y a partir de lo previsto en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que ella también resulta procedente –esta vez, como mecanismo de protección definitivo– en aquellos casos en los que la herramienta judicial que prevé el ordenamiento se muestra como ineficaz para garantizar los derechos fundamentales del afectado

SOBRE LA NATURALEZA Y LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL DERECHO DE PETICIÓN.

El artículo 23 de la Constitución Nacional establece el derecho de petición como el que tiene toda persona para presentar a la administración peticiones respetuosas que impliquen un interés particular o público; de igual manera se ha enseñado por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, que su núcleo esencial se concreta en: ***“la obtención de una respuesta pronta y oportuna, que además debe ser clara, de fondo y estar debidamente notificada, sin que ello implique, necesariamente, que en la contestación se acceda a la petición. Cualquier trasgresión a estos parámetros, esto es, si no se obtiene una respuesta oportuna, clara, de fondo, congruente***

o si ésta no es puesta en conocimiento del peticionario, existe una vulneración del referido derecho fundamental”¹ (subrayado y negrilla fuera de texto).

Sobre los elementos que lo componen ya referenciados, esto es, oportuna, clara, de fondo, congruente, la misma corte ha sido enfática en establecer que: “La oportunidad se refiere a **la resolución de la petición dentro del término legal**, previsto en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 (...) La eficacia consiste en que la **respuesta debe ser “clara y efectiva respecto de lo pedido**, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. Por su parte, el deber de emitir una respuesta de fondo se refiere a que en ella **se aborden de manera clara, precisa y congruente** cada una de las peticiones formuladas. Finalmente, la congruencia se refiere a la **coherencia entre lo respondido y lo pedido**, de tal manera que la solución verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición”² (subrayado y negrilla fuera de texto).

Ley estatutaria No. 1755 de 2015.

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

CASO CONCRETO

Se circunscribe este caso a determinar si la ALCALDÍA DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA DISTRITAL – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO, vulneró a la parte accionante el derecho de petición al no otorgarle ninguna respuesta frente a la solicitud radicada el día 01 de septiembre de 2023 bajo el radicado N° 202341730101659432.

En ese orden de ideas, de los elementos de convicción aportados con la demanda de tutela, se encuentra que efectivamente fue radicado derecho de petición el día 01/09/2023 ante la entidad ALCALDÍA DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA DISTRITAL – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO, mediante el cual se solicitó según escrito aportado en el libelo tutelar “*radica solicitud de copias y otras en la ventanilla única de la Alcaldía de Santiago de Cali*”.

¹ Sentencia T-243 de 2020.

² Sentencia T-476 de 2020, Reiteración de las sentencias: T-1160A de 2001 y T-867 de 2013.

Por su lado, el ALCALDÍA DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA DISTRITAL – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO, remitió contestación a la presente acción de tutela, informando que dio respuesta a la petición radicada por el accionante mediante oficio:



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202341310320089541
Fecha: 11-10-2023
TRD: 4131.032.13.1.953.008954
Rad. Padre: 202341730101659432

MARIO ANDRES TORO COBO
Calle 10 # 45 – 40, Oficina 1201 Edificio Bolsa de Occidente
Celular: 320 817 2801
Correo electrónico: Mario.andres.toro@hotmail.com

Cali, Valle del Cauca

Asunto: Respuesta a Derecho de Petición

El cual se encuentra debidamente notificado al peticionario al correo proporcionado en la petición y en la presente acción constitucional, esto es, mario.andres.toro@hotmail.com.

Así las cosas, una vez verificada la notificación realizada al peticionario, se evidencia que la misma fue efectiva, ya que adjuntó a la presente tutela el acuse de envío del correo con la respuesta, la cual fue enviada al correo electrónico mario.andres.toro@hotmail.com, el día **18/10/2023, a las 08:51** con estado "Acuse de recibo". Así mismo, se adjuntó el contenido de la respuesta brindada al accionante en resumen así:

“

- Que, la Oficina Técnica Operativa de Cobro Coactivo, remite copia digital de los expedientes solicitados al correo Mario.andres.toro@hotmail.com, los cuales constan de cuarenta y uno folios (41), por tal razón como la documentación es remitida en medio digital no tiene ningún costo.
- Por otro lado, y respecto a la pretensión número tres (3), en la cual solicita se le informe la normatividad utilizada en los procesos para cuantificar la liquidación en costas y agencias en derecho, se le informa que esta Oficina se rige de acuerdo a lo estipulado en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y el artículo 836 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional.

”

Como resultado de lo anterior este despacho judicial encuentra la misma ajustada a derecho, toda vez que fue **clara, congruente, de fondo y debidamente notificada**, atendiendo todas y cada una de las inquietudes reclamadas.

Por lo anterior, establece el Juzgado que, si bien en su momento la ALCALDÍA DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA DISTRITAL – OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE COBRO COACTIVO, vulneró al tutelante sus derechos fundamentales al no brindarle respuesta oportuna a su petición, y a través de su contestación pretendió indicar a este despacho que se dio contestación a la petición dentro del término legal establecido, lo que no fue posible concluir como quiera que la notificación de la contestación se dio el día 18 de octubre de 2023 como quedo expuesto en el cuerpo de la presente providencia, no es menos cierto que si se dio contestación a la petición dentro del trámite de la presente acción constitucional por lo que en la actualidad no existe situación alguna que imponga la intervención del juez

constitucional frente a ordenar que se dé contestación a la misma, porque la circunstancia denunciada como conculcadora de las garantías esenciales invocadas, fueron superadas en vista de la respuesta enviada por la entidad tutelada en el transcurso de esta acción de tutela.

En este sentido, confluyen los requisitos establecidos en la jurisprudencia Constitucional para negar la acción de tutela por carencia actual de objeto por hecho superado. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-240-2021, recordó el concepto de carencia actual de objeto, así:

“La jurisprudencia constitucional ha identificado tres hipótesis en las cuales se configura el fenómeno de la carencia actual de objeto, a saber: (i) cuando existe un hecho superado, (ii) cuando se presenta un daño consumado y, (iii) cuando acaece una situación sobreviniente”³.

27. Hecho superado. *Se presenta cuando, entre la interposición de la acción de tutela y la decisión del juez constitucional [50], desaparece la vulneración o amenaza al derecho fundamental cuya protección se invoca y se satisfacen las pretensiones del accionante como producto de la conducta de la entidad accionada [51]. En este supuesto, el juez de tutela debe verificar: (i) que, en efecto, se ha satisfecho por completo [52] la pretensión de la acción de tutela [53] y (ii) que la entidad demandada haya actuado (o cesado su conducta) de forma voluntaria [54]. (Subraya, cursiva y negrita fuera de la cita).”⁴*

En consecuencia, se negará dicha pretensión por carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que, ha cesado la vulneración de los derechos fundamentales a raíz de la acción correctiva de la entidad accionada.

Al momento de notificar este fallo, se le hará saber a los interesados, el derecho que les asiste a impugnarlo dentro de los tres días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Por lo expuesto, el Juzgado, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela instaurada por el señor **GUILLERMO CAICEDO ARANGO** quien actuó a través de apoderado judicial, por haberse configurado una carencia actual de objeto por hecho superado.

SEGUNDO: ORDENAR que se notifique a las partes lo aquí decidido por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que el fallo no sea impugnado, por Secretaría remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si este fallo no fuere revisado por la H. Corte Constitucional, una vez excluido **ARCHÍVESE**.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE



LUIS CARLOS QUINTERO BELTRAN
JUEZ

³ Sentencias SU-522 de 2019, T-038 de 2019, T-205A de 2018, T-261 de 2017, T-481 de 2016, T-321 de 2016, T-200 de 2013, entre otras.

⁴ Sentencia T-240-2021.